

Rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción para una verdadera transformación.

Mtro. Omar Olvera Cruz

Desde la formación de las sociedades; es decir, desde la forma primitiva de las civilizaciones, ha sido estudiado y teorizado el papel y la naturaleza de los hombres junto con sus formas de organización, con ello se planteó la necesidad de que existieran leyes y convenios que autorregularan el estado natural de los individuos, buscaran el bienestar común y garantizaran la voluntad general. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jaques Rosseau han explicado con sus respectivas diferencias dicha naturaleza y la convivencia de los hombres, fundamentando el origen del Estado a través del contrato social.

Hobbes (1651) sostiene que el hombre por su naturaleza es dominado por sus instintos que lo mantienen en un estado de guerra y que es a través del contrato social como se puede mantener en paz y convivir en armonía. Para Locke (1690) el contrato social surge de la necesidad de garantizar los derechos naturales de los hombres, los cuales son: la vida, igualdad, libertad y propiedad. Por último, para Rousseau (1762) el hombre en su estado natural es bueno, pero es en la convivencia y con la aplicación de convenios cuando se corrompe y hace competitivo.

Estos estudiosos coinciden en que los hombres renuncian a parte de sus voluntades e intereses individuales a través del contrato social, dando con ello origen al Estado como forma de organización y regulación de la convivencia, con el objetivo de buscar la voluntad general por medio de leyes y normas, en otras palabras, al ceder esas voluntades los hombres en su forma de organización social están otorgando poder a una persona o grupo reducido para que conduzca los asuntos e intereses de la mayoría.

Al hablar de poder, es inevitable pensar en aquella frase de Lord Acton: "Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente", desde el análisis filosófico de la naturaleza del hombre ya se planteaba cómo este, en su estado natural

tiende a corromperse, pero esta posibilidad se maximiza cuando además le es transferido por la mayoría, el poder para la toma de decisiones y materializar la voluntad general.

Hablando de la corrupción, existen muchas definiciones del término, pero en función de lo que nos tiene hoy en este ensayo, retomaré las definiciones de corrupción política de Bobbio, Matteucci y Pasquino, quienes lo refieren como: “El fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa” (2007). Y de corrupción, de la organización Transparencia Internacional, que la define como: “El abuso del poder confiado para obtener beneficios privados”, culpándola además de erosionar la confianza y legitimidad, así como agudizar problemas como la pobreza, desigualdad y crisis ambiental.

Debemos partir del hecho de que las personas que están encargadas de la toma de decisiones y de conducir los asuntos en los diferentes ámbitos de gobierno, son miembros del pueblo que han sido elegidos y que se les ha transferido poder, pero no por ello, este poder debe abusar y traspasar los límites que las leyes y normas establecen para sus funciones.

Podríamos referir que la corrupción es una externalidad inherente del ejercicio del poder, ya que viene condicionada desde la naturaleza del hombre, por lo que se debe inhibir. En el “proceso civilizatorio del poder” se han tenido una gran serie de avances en conducirlo a autorregularse y limitarse a ejecutar lo que las normas le demandan; sin embargo, sigue siendo uno de los principales problemas y asuntos prioritarios de la sociedad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, poco más de 1 de cada 2 personas encuestados (56.4%) refirió como segundo problema más importante del país a la corrupción, solo por detrás de la inseguridad y delincuencia; además, se estima que solo el costo de la corrupción para ese año en pagos de trámites o solicitudes de servicios fue de 11,910.6 millones de pesos, por lo anterior, es necesario que existan contrapesos reales y un sistema de incentivos que obliguen al poder a ajustarse, que garantice la correcta función pública y una rendición de cuentas con transparencia que ayude a combatir la corrupción.

En el caso de nuestro país, vivimos en un federalismo donde existen instituciones democráticas en los tres órdenes de gobierno y está establecido en nuestra constitución que el ejercicio del poder en la federación está dividido, permitiendo con ello tener un sistema de pesos y contrapesos, un poder legislativo que se encarga de crear y modificar las leyes y reglas del juego, un poder ejecutivo que su principal función es guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen y un poder judicial que es el encargado de administrar justicia y garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos; con el equilibrio de estos poderes es que se incide de manera positiva en el ejercicio de gobierno.

De acuerdo con Ríos (2020) en el deber ser, la división de poderes del orden federal y estatal son completamente autónomos e independientes y sirven de contrapeso, pero cuando se observa el nivel municipal no sucede de esa manera, la forma más cercana sería que el ejecutivo está representado por el Presidente Municipal; el legislativo recae sobre el H. Ayuntamiento, del cual el mismo Presidente forma parte; y el judicial no existe, a lo que más se llega, es a tener un Órgano Interno de Control y todo lo relacionado a los asuntos judiciales se remiten al poder judicial de los otros dos niveles de gobierno; es decir, el estado o la federación.

En la práctica y de acuerdo con lo expuesto por el autor, una de las maneras de tener un acercamiento a un sistema de equilibrio de poderes en el ámbito municipal dadas las condiciones actuales, es contar un Órgano Interno de Control objetivo e imparcial que pueda cumplir con sus funciones y atribuciones a favor del correcto funcionamiento de la administración pública municipal y por supuesto en beneficio de la población.

El papel de la contraloría municipal toma relevancia en el ejercicio de gobierno, ya que en la misma normatividad se refiere, ésta será la encargada de fiscalizar, vigilar y evaluar el desempeño de las distintas áreas de la administración, mediante la supervisión de las acciones realizadas por las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; además, investigará las presuntas responsabilidades administrativas e inspeccionará la hacienda pública municipal para la correcta aplicación de los recursos con apego a la normatividad y leyes aplicables, por mencionar algunas de sus responsabilidades.

Por ello, en el ámbito municipal una de las instancias importantes para poder combatir la corrupción, exigir se dé cumplimiento a la rendición de cuentas y transparencia, es la Contraloría Municipal u Órgano Interno de Control.

Alejado de fobias y filias, es innegable que a partir de 2018 existe un cambio de paradigmas en la conducción de los asuntos y replanteamiento de las instituciones, conocido como el proceso de transformación, el partido y movimiento que ha sido elegido por la mayoría en las urnas para asumir cargos públicos en este año, tiene un peso y poder que le permitirá continuar con dicho proceso, por lo anterior, es importante poder contar con elementos que lleven al cumplimiento de la voluntad general; esto es, la materialización del bienestar de la población.

Anteriormente hice referencia a estadísticas respecto de la corrupción en el país, pero en la misma ENCIG 2023, el INEGI expone que para Hidalgo, en sintonía con la percepción nacional, el segundo problema que las personas encuestadas identifican es la corrupción (47.7%), de igual forma cuando hablamos de los costos de la corrupción, resulta que para el 2023 Hidalgo fue el segundo estado de la república en donde el costo promedio por persona de incurrir en actos de corrupción fue el más alto, solo por detrás de la CDMX.

Observar estos datos que como entidad tenemos respecto de la corrupción, confianza y percepción de las instituciones es interesante, ya que es un punto de partida hacia el enorme reto que se tiene enfrente. Respecto de la confianza que se tiene en los gobiernos municipales, el INEGI nos refiere que el porcentaje de la población de 18 años y más que confía en los gobiernos municipales en Hidalgo es del 52 % o sea, casi 1 de cada 2 personas no confía en los gobiernos municipales. El porcentaje de pagos, trámites y solicitudes municipales donde las y los usuarios se sintieron satisfechos al realizarlos fue del 53.5% para trámites y del 46.4% para servicios, cerca de la mitad de las y los usuarios de trámites y servicios municipales no están siendo atendidos de manera adecuada y eso se refleja en la satisfacción que remiten las encuestas oficiales.

Al hablar de los tipos de trámite, pagos o solicitudes específicos donde los encuestados experimentaron corrupción en Hidalgo encontramos que los cinco principales son: contacto con autoridades de seguridad pública (59.4%); trámites para abrir una empresa

(27.5%); trámites ante el ministerio público o fiscalía estatal (21.2%); permisos relacionados con la propiedad (23.5%) y trámites municipales (18%). Como podemos ver cuatro de los cinco principales trámites, pagos o servicios donde experimentaron corrupción fueron en el ámbito municipal, esto es de importante atención ya que estamos hablando no de una percepción, sino de la experiencia propia de la ciudadanía con la corrupción.

Reyes (2008) explica que el fenómeno de la corrupción tiene una característica esencial, la clandestinidad, particularidad que limita su cuantificación y medición; sin embargo, existe una vía indirecta pero no por ello menos confiable, a través de la medición de la percepción de la gente. De acuerdo con el autor, si la corrupción ha estado presente, esta habría dejado huellas registradas en la opinión pública.

En este sentido se toma en cuenta la percepción de la corrupción como un indicador en diversos estudios comparativos entre naciones, entidades, organismos, etc. Para el caso del estado de Hidalgo, como expuse anteriormente existen registros de algunas experiencias con la corrupción, pero de igual manera existen datos referentes a la percepción de la corrupción, de acuerdo con la ENCIG 2023 del INEGI el 81.3% de la población en Hidalgo de 18 años y más percibió que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes.

La gravedad de la corrupción ha dejado una huella importante en la sensación de la población de nuestro estado, tal como lo muestra el porcentaje de percepción, poco más de 8 de cada 10 hidalguenses mayores de 18 años percibe que se cometen actos de corrupción muy frecuente o frecuentemente y tal como refiere Reyes (2008) esto de igual manera evidencia la pérdida de credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía.

Una de las herramientas que sirven para prevenir y combatir a la corrupción es la rendición de cuentas, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ésta es uno de los principios que los servidores públicos deberán tener en el desempeño de sus funciones y es a través del cumplimiento de esta responsabilidad que las y los ciudadanos pueden estar informados del desempeño de los servidores y de aspectos importantes como su patrimonio o evolución del mismo.

De acuerdo con Schedler (2008) la rendición de cuentas es la traducción más cercana al término original de la comunidad internacional *accountability*, pero que a criterio del autor, la traducción no es lo más acertada ya que muchas veces se entiende como algo voluntario, cuando la rendición de cuentas es algo obligatorio y va en dos sentidos: las cuentas y los cuentos. Las primeras son los números o las cuentas del ejercicio de los recursos públicos y los segundos son las explicaciones del por qué de las decisiones tomadas; es decir, la justificación del actuar.

Una de las responsabilidades dentro de la rendición de cuentas, es dotar de información o poner a la vista de todos la misma; es decir, ser transparente con la información generada en el desempeño del encargo.

Schedler (2008) expone:

Muchas veces, la rendición de cuentas se agota en la producción de montones de papel en forma de informes regulares, muchas veces barrocos, vacuos y tediosos; y en la colocación de montones de información no siempre relevante, ni comprensible, ni bien estructurada en el espacio público (p.19).

La transparencia en muchas ocasiones suele ser ligera, ya que se limita a publicar organigramas, sueldos y demás información que se está obligado a publicar, pero sin ir más allá de solo la publicación de informes y estadísticas, una transparencia efectiva debiera llegar al esclarecimiento de las cuentas y el actuar, además de que la información debe complementarse para tener una rendición de cuentas efectiva, con justificaciones y posibles sanciones.

Ambas, la rendición de cuentas y la transparencia que ella conlleva, nunca van a darse en un ciento por ciento, ya que como refiere la literatura, aun cuando se nos dote de información que demuestre los procedimientos y el actuar, no siempre lograremos conocer las intenciones e intereses que hay detrás de cada decisión; no obstante, el cuestionar y hacernos de la información servirá de incentivo para regular la conducta de las y los servidores públicos, al igual que propiciará un diálogo y cuestionamiento que genere una mayor confianza en la población.

En el presente ensayo hemos abordado los temas de corrupción y su atención, la rendición de cuentas y la transparencia; por lo que es importante precisar que dentro del funcionamiento de la administración pública municipal, el Órgano Interno de Control es la primer trinchera para combatir los actos de opacidad y corrupción.

De acuerdo con la Constitución del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo este órgano tiene dentro de sus facultades el corregir, sancionar e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento, planear, coordinar y organizar el sistema de control y evaluación, promover la participación de la sociedad a través de la contraloría social, implementar normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría, emitir y vigilar el cumplimiento del código de ética, recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones patrimonial y de intereses, entre otras.

Dada la importancia del área dentro de la administración pública municipal y en este caso para nuestro municipio, celebro la realización del proceso de selección del cual este ensayo forma parte, ya que, al ser una convocatoria pública y abierta, esto permitirá tener una variedad de visiones que sirvan para poder tomar la mejor decisión para Mineral de la Reforma y su población.

La persona que llegue al frente del Órgano de Interno de Control deberá conducirse con imparcialidad, objetividad, integridad y profesionalismo, principios que además son inherentes del servicio público y que permitirán poder llevar a cabo un trabajo correcto en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, no es que los demás servidores públicos no deban contar con estos elementos, sino que la persona titular al ser encargado de coordinar la vigilancia del desempeño de los servidores públicos deberá corresponder en mayor medida con dicha responsabilidad.

Por último y tal como mencioné, estamos viviendo un proceso de transformación no solo en nuestro municipio sino a lo largo y ancho del país, lo podemos constatar con las recientes reformas constitucionales, la llegada de la primera presidenta de los Estados

Unidos Mexicanos y la llegada a muchos estados y municipios de gobernantes del partido que abandera dicho movimiento, en el caso de Mineral de la Reforma, no es la excepción.

Esta transformación prometida puede ser para bien o para mal en todos los niveles, por lo cual considero fundamental deberá estar acompañada de un apego a la legalidad, del cumplimiento de los principios, funciones y atribuciones de las y los servidores públicos, de un correcto, eficiente y eficaz uso de los recursos públicos, con una rendición de cuentas, con prevención, atención y sanción de la corrupción, entre otros, para que la transformación que hoy vivimos y especialmente en nuestro municipio sea verdadera, de beneficio y traiga el bienestar de la población.



Referencias

Bobbio, N., Matteucci, N. y Pasquino G. (2007). *Diccionario de Política*. Siglo XXI

Constitución Política del Estado de Hidalgo

Hobbes, T. (1651). *Leviatán*. (Trad. Manuel Sánchez Sarto). México: Fondo de Cultura Económica. 1940.

INEGI (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, México

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo

Locke, J. (1690). *Dos tratados sobre el gobierno civil*. (Trad. Armando Lazaro Ros). España: Aguilar. 1955.

Reyes, F. (2008). *Corrupción: de los ángeles a los índices*. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

Ríos, S.(2020). La ausencia de división de poderes en el municipio: Una debilidad en el federalismo mexicano. *Iuris Tantum*, 34, 81-95. <https://doi.org/10.36105/iut.2020n31.07>

Rousseau, J. (1762). *El contrato Social*. (Trad. Leticia Halperín Donghi) Argentina: La página. 2003.

Schedler, A. (2008). *¿Qué es la rendición de cuentas?*. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.